

Del 15 de octubre de 1979 a la elección de constituyentes

Con la confrontación militar, formalmente desatada a comienzos de 1981, la crisis salvadoreña ha llegado a convertirse en verdadera guerra civil. Pero es importante no llamarse a engaño sobre el alcance de la confrontación bélica: la guerra, por grave que sea, no es sino la expresión última de un conflicto total que tiene sus raíces, por un lado, en el desequilibrio y obsolescencia de la estructura económica y social del país, que han generado un abismo entre las clases dominantes y dominadas; y, por otro, en el excluyente y autoritario sistema político que ha conducido a la corrupción y desintegración de las instituciones republicanas. La destrucción económica, la corrupción y caos administrativo, la sangrienta represión contra el pueblo salvadoreño, todo ello es anterior a la guerra en sí, aunque ciertamente con ella se ha agudizado a tal punto, que hoy ya no puede pensarse en su solución sin resolver también y primero la conflagración militar. Todo esto parecía intuirlo el movimiento de la juventud militar que se alzó el 15 de octubre; todo esto parece haberse olvidado hoy, cuando una vez más se pretende constreñir el horizonte político de El Salvador a una formalidad liberal, en la que sólo expresan fe quienes siempre la manipularon o quienes quizá hoy piensen que podrán manipularla.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, se quiere concluir el proceso comenzado el 15 de octubre de 1979 con una supuesta consulta popular por medio de elecciones. De este modo, se pretende legitimar en las urnas una opción y acción políticas que en dos años no han logrado una justificación objetiva razonable ni un mínimo respaldo popular. Las elecciones se convierten así en una fórmula engañosa, vacía de sentido democrático, que apenas servirá para celebrar el funeral de los ideales del 15 de octubre, pero que en nada ayudará a resolver los gravísimos problemas que enfrenta El Salvador.



1. La solución electoral como maniobra oligárquica.

Tanto la Junta de Gobierno como sus aliados internacionales mantienen que unas elecciones libres constituyen la mejor si no la única fórmula para solventar la crisis global que sufre El Salvador. Sorprende la fe electoral reencontrada por algunos de los actuales detentadores del poder político cuando hace apenas dos años, en circunstancias bastante menos conflictivas, rechazaban un llamado electoral similar del entonces presidente, General Romero, por la obvia razón de que no había un mínimo de condiciones que hiciera de las elecciones un instrumento democrático viable y útil para el país. Apelar hoy de nuevo a las elecciones como fórmula última para dirimir el conflicto resulta un expediente para evadir la responsabilidad de llevar adelante las reformas prometidas y, lo que es peor, un expediente para restablecer una vez más un orden oligárquico en El Salvador ignorando sus gravísimos problemas estructurales y coyunturales. Elecciones en estas circunstancias significan ni más ni menos que someterse de nuevo a quienes en ningún momento estuvieron dispuestos a cambiar y hoy menos que nunca. Estos sectores constituyen los mismos grupos minoritarios que ayer se opusieron tenazmente a la "transformación agraria" de Molina y que, en estos meses de enfrentamiento, muerte y dolor para el pueblo han intentado por todos los métodos que el programa de cambios mínimos de la juventud militar quedara en puras palabras, mientras aseguraban su capital en el extranjero e incitaban a la violencia en el país.

Resulta difícil explicar el salto mortal que media entre las aspiraciones expresadas en la Proclama del 15 de octubre de 1979 y el estrecho canal ofrecido por unas elecciones, que ya están sirviendo para que vuelvan a la palestra las mismas viejas ideas y figuras de la política salvadoreña, pertenecientes a un régimen que el movimiento de octubre depuso por violar los derechos del conglomerado, fomentar y tolerar la corrupción en la administración pública, crear un verdadero desastre económico y social, y por desprestigiar profundamente al país y a la Fuerza Armada. Los pocos supervivientes políticos del golpe militar de octubre de 1979 y los civiles que todavía les acompañan han caído o pretenden haber caído en la trampa de que, para pacificar y reconstruir la nación, basta con llamar a elecciones a todos los partidos políticos. De ese modo, voluntaria o involuntariamente, tan sólo privilegian un reafianzamiento en el poder de los afectados por las reformas que, por la vía parlamentaria y en las presentes circunstancias, intentan que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del movimiento militar que derrocó a Romero.

Se diría que no hemos aprendido de nuestra propia historia. Porque algo parecido, aunque en menor escala, sucedió en 1948 y en 1961, cuando la voluntad de cambio fue encajonada en los vericuetos del parlamentarismo de papel. Una y otra vez la oligarquía ha logrado maniobrar y manipular instituciones y personas en favor de sus intereses y privilegios. Sabe bien el gran capital que los problemas nacionales exigen la urgente implantación y desarrollo de cambios estructurales que den pie a un nuevo sistema político. Y sabe también el gran capital que los cambios insistentemente reclamados y justificados a nivel de discurso ideológico pueden terminar desencadenando los cambios a nivel real. De ahí, en buena medida, la lucha para que incluso los muy contados remanentes del movimiento insurreccional de octubre cesen cuanto antes en su gestión político-administrativa y den paso a la restauración de los organismos tradicionales, mediadores de un Estado de Derecho que tan bien ha servido los intereses de las minorías.

Con el argumento de que las elecciones son una salida democrática, el gran capital busca recuperar el terreno perdido, tanto objetiva como subjetivamente. En lo objetivo, se pretende que cese la actividad reformista de la Junta de Gobierno, que no se prosiga con el plan de cambios que se comenzó a efectuar a partir de marzo de 1980 y aun que se dé vuelta atrás a las pocas reformas ejecutadas. De hecho, y esto lo han manifestado en foros y simposios, lo que desean es anular la nacionalización de la banca y del comercio exterior, volver a un esquema de economía social de mercado —por supuesto, dentro de los márgenes proteccionistas a que han estado acostumbrados—, y recuperar las mejores tierras expropiadas por la reforma agraria.

Pero, en lo subjetivo, desean borrar de la conciencia colectiva la aspiración de cambios sociales, la idea misma de que, para progresar, el país necesita realizar transformaciones profundas, o, por lo menos, erradicar toda esperanza de que los cambios son posibles y viables en El Salvador. Se trata, en una palabra, de clausurar una vez más el horizonte de la historia y volver a imponer un destino cerrado y fatalista para la mayoría de los salvadoreños.

2. Las elecciones como traición a la juventud militar.

En las actuales circunstancias, acorralado internamente el gobierno por los sectores más reaccionarios del gran capital, la fórmula electoral significa un rechazo final a los ideales de la juventud militar y una última burla hacia quienes creyeron que la Fuerza Armada estaba de verdad dispuesta y podía impulsar la transformación global del país. Nadie discute, a estas alturas, que los hechos sociales produzcan un nuevo derecho, y que movimientos que cuentan con el apoyo de las mayorías puedan generar cambios de las estructuras jurídicas e ideológicas. El derecho nace de las relaciones sociales y es producto de acciones históricas significativas en el seno de una sociedad. En este sentido, la insurrección de octubre, sin constituir propiamente una revolución, sí pretendía dar respuesta a algunas exigencias de las mayorías salvadoreñas en el orden económico, político y social. Como ya se ha indicado en varias oportunidades, el error más grave de este movimiento fue no haberse apoyado en el pueblo para fortalecer la conducción del gobierno, lo que llevó a la pronta desvirtuación de sus mejores potencialidades y al desplazamiento de sus gestores más sinceros. De este modo, el levantamiento de octubre no sólo no ha podido generar hasta ahora relaciones sociales nuevas que fundamenten un nuevo derecho, y ni siquiera ha sido capaz de lograr un mínimo de legitimación social.

Surge entonces la tentación de las elecciones. Tentación por lo que tienen de atractivas: dar una apariencia de democracia, aunque lo sea sólo sobre el papel. Tentación también por lo que tienen de peligro: conformarse con la aplicación de un mecanismo, olvidándose de los problemas que en definitiva se pretendía resolver. Tentación, en fin, por lo que tienen de engañosas: buscando legitimarse con el voto popular, lo único que se haría es legitimar de nuevo el dominio de los sectores oligárquicos. La rearticulación e iniciativa de la oligarquía en estos momentos tiene como fin desprestigiar el esquema reformista de octubre e incluso cualquier esquema reformista, y así volver al pasado en un nuevo arreglo con los elementos militares dispuestos a traicionar aún más la Proclama de la Fuerza Armada. Este es el meollo de su postura, que rechaza sin distinción alguna "comu-

nismo” y “comunitarismo”, social democracia y democracia cristiana, marxismo y “tercer-mundismo” y, en general, cualquier “ismo” que no sea su particular liberalismo, alérgico al cambio.

No es de extrañar, entonces, que los partidos democráticos y revolucionarios descarten el planteamiento electoral como salida al conflicto. En las actuales circunstancias, la entrega del gobierno por medio de unas elecciones significa dos cosas: una, que no hubo capacidad de cambio social en los gestores del movimiento de octubre y que lo único que dejarán como contribución histórica será una brutal represión contra el pueblo organizado y contra millares de inocentes que murieron entre el fuego cruzado de los sectores en guerra; y, dos, que si alguna voluntad hubo de identificarse con las masas marginadas ésta fue vencida por la absolutización de la propia supervivencia de la Fuerza Armada, que se antepuso a los intereses de toda la República.

Como en períodos anteriores, la oligarquía y sus servidores han doblado el brazo al ejército y lo han puesto en situación de convocar a elecciones en un ambiente y en un clima sólo favorable a los intereses antipopulares. Si ello lo han meditado o no los líderes castrenses y sus aliados civiles circunstanciales, es difícil de afirmar. Si algo de esto han comprendido los analistas del Departamento de Estado norteamericano a la luz de los hechos concretos del drama salvadoreño, es presumible, aunque no verificable. Lo cierto es que todo está orquestado para celebrar unas elecciones de Asamblea Constituyente en 1982 y presidenciales en 1983, sin una mínima consolidación de las reformas emprendidas, en un clima de terror generalizado por la represión sistemática de toda disidencia, y en medio de una guerra civil que ha exasperado hasta límites intolerables la crisis económica y ha contribuido al desmoronamiento de la convivencia social.



¿Qué significan las elecciones de 1982? Para la oligarquía, poseedora de medios de producción, la oportunidad de reconquistar y afianzar el poco poder perdido por la acción de autonomía relativa de la Fuerza Armada. No siendo sustanciales los cambios operados, fácil les será a los sectores oligarcas desplazar a algunos elementos castrenses que en 1979 y aún en 1980 hablaban de un rompimiento con el pasado. La legitimación por el voto amañado, arreglado aun antes de que el ciudadano marque las papeletas, tendría base en el control absoluto de los medios de comunicación y en las alianzas previsibles con ciertos militares proclives a la servidumbre oligárquica, a quienes poco o nada parecerían preocupar los problemas estructurales del país. Los diversos grupos pro-oligárquicos que, so pretexto de defender a la patria del comunismo, han aparecido en la escena política, reviven viejos juegos de salón entre compadres y son muestra fehaciente de que sólo se busca recuperar todo el poder por los mismos métodos que han hecho de las elecciones la extrema unción de la democracia parlamentaria en El Salvador.

Por el mecanismo propuesto, el proyecto histórico de octubre de 1979 va de las reformas con represión a unas elecciones con represión y, en definitiva, a un simple autoritarismo oligárquico y represivo. En otros términos, de la idea y anhelo de cambio no quedarán sino vagas intenciones y una enorme frustración ciudadana, tanto mayor cuanto más se haya creído en promesas. Los problemas que desencadenaron el 15 de octubre quedarán no sólo irresueltos, sino seriamente agravados. Y, sobre el sedimento de hambre, marginalidad y miseria, se dejarán las heridas abiertas de una represión continua e inmisericorde, de una guerra cada vez más voraz, de miles y miles de hogares ensangrentados por las balas y vaciados por el terror.



CCE NO PUEDE CAMBIAR FUNCIONARIOS. — “Algunos partidos políticos alegan que el PDC es el partido oficial, porque tiene varios dirigentes en el gobierno. El CCE no puede cambiar funcionarios; eso le corresponde a la Junta Revolucionaria de Gobierno”, dijo ayer el Presidente del CCE, Dr. Jorge Bustamante. Izquierda a derecha: Dr. Luis A. Aparicio, Ing. Ramón Ernesto Rodríguez, Dr. Bustamante y Dr. Mauricio Mazier.

3. El valor de las elecciones.

Evidentemente, lo que está en cuestión no es el valor del voto popular o de los procesos electorales como instrumento democrático. Lo que está en cuestión es el valor de las elecciones en el presente contexto de El Salvador y, más en concreto, su valor real para resolver el conflicto actual. Los comicios pueden ser muy útiles en un contexto diferente, como un modo de consulta social respecto a la conducción política del Estado, al modelo económico preferido o a las formas concretas de convivencia y organización social. Pero insistir en absolutizar las elecciones en la actual situación salvadoreña es ignorar la complejidad del proceso en marcha y pedir a todo un pueblo que deposite su fe en un mecanismo que, en circunstancias mucho más favorables, ha sido burlado una y otra vez, y de cuya pureza se ofrecen como principales garantes muchos de quienes participaron en fraudes pasados. No pocos jóvenes se fueron a la guerrilla por el cierre repetido y violento de la vía electoral. Pretender hoy que todo ha cambiado simplemente porque así se afirma desde el poder, en San Salvador o en Washington, denota ingenuidad o malicia: los cambios introducidos o han sido desnaturalizados o no han sido capaces de alterar sustancialmente la tradicional estructura de poder, diga lo que diga el discurso, llámese revolucionario o no el régimen; las organizaciones populares siguen siendo perseguidas y sus líderes cazados como alimañas; la falta de control real sobre amplios sectores de los cuerpos de seguridad y fuerzas paramilitares continúa desangrando inmisericordemente al país; y, sobre todo, un conflicto armado creciente entre dos ejércitos, el gubernamental y el insurgente, ha desquiciado la organización social del país, desplazando a más de medio millón de habitantes y resquebrajando las instituciones más fundamentales para la convivencia. Hablar de elecciones como salida a estos problemas resulta simplemente absurdo.

Pero es que además de absurdas, las elecciones en esta situación son inviables. La inviabilidad no se refiere a la materialidad misma de las elecciones, a que los comicios no puedan tener lugar "bajo las balas"; ése es un punto de logística militar, parcialmente resoluble al menos en algunas zonas del país. La inviabilidad se refiere a que no son posibles unas elecciones que produzcan un gobierno legítimo. Las fuerzas del FDR y del FMLN han sido reconocidas internacionalmente como fuerzas políticas representativas, con derecho a ser tomadas en cuenta en cualquier solución global al problema salvadoreño. Es difícil que se entienda el valor democrático de unas elecciones de las que, de hecho, van a quedar excluidas las fuerzas de oposición más amplias y significativas. Y a nadie se le esconde que, en el supuesto improbable de que el FDR o alguno de los partidos que son miembros del FDR, como el MNR o la UDN, decidiera

entrar en el juego electoral y ganara los comicios, el gobierno militar jamás les entregaría el poder constituyente. No lo hizo hace unos años, menos lo hará en 1982, cuando la polarización social estará todavía determinando el carácter final del conflicto.

Bien está y es loable la aspiración a someter los procesos sociopolíticos al juicio popular mediante la vía del voto. Sin embargo, la consulta popular tiene que ser en verdad consulta y popular, no un bingo de minorías en el seguro marco de las decisiones ya tomadas. Un verdadero proceso electoral exige que el pueblo exprese, mayoritaria y libremente, su opción. Todo lo cual requiere una situación objetiva y subjetiva muy distinta a la actualmente imperante en El Salvador. Muchas voces, nacionales e internacionales, desde perspectivas muy diversas, han indicado algunos de los requisitos que harían posible un proceso electoral. Los principales podrían sintetizarse en tres: un clima de paz, la apertura democrática y la clarificación honesta de los problemas nacionales.

Ante todo, un clima de paz. Mientras impere la inseguridad, la violencia, el miedo y aun el terror, es ingenuo pensar que el pueblo estará dispuesto a expresar en público su opinión, tanto en la presentación de opciones distintas a las dominantes como en el apoyo a la disidencia. En ello le va la vida. Por tanto, si se quieren elecciones hay que lograr primero un clima de paz. Levantar la Ley Marcial y el Estado de Sitio son condiciones necesarias, pero a todas luces insuficientes. Hace falta sobre todo terminar con la represión, poner coto a la violencia asesina de los cuerpos paramilitares, hacer cumplir la ley a los propios funcionarios del sistema judicial, a todos los niveles. Pero hace falta también lograr un alto al conflicto armado, tanto de un lado como de otro. Sin un verdadero alto al fuego, cualquier candidato, cualquier partido, cualquier grupo electoral, estará sujeto en todo momento a la posible irracionalidad de quien sólo confía en las armas. Esta es la razón más obvia de que, antes de ir a elecciones, haya que sentarse a negociar la paz. Si en verdad se quiere consultar al pueblo salvadoreño, hay que establecer la paz; y la paz hoy en El Salvador sólo se conseguirá mediante un acuerdo negociado entre las fuerzas beligerantes.

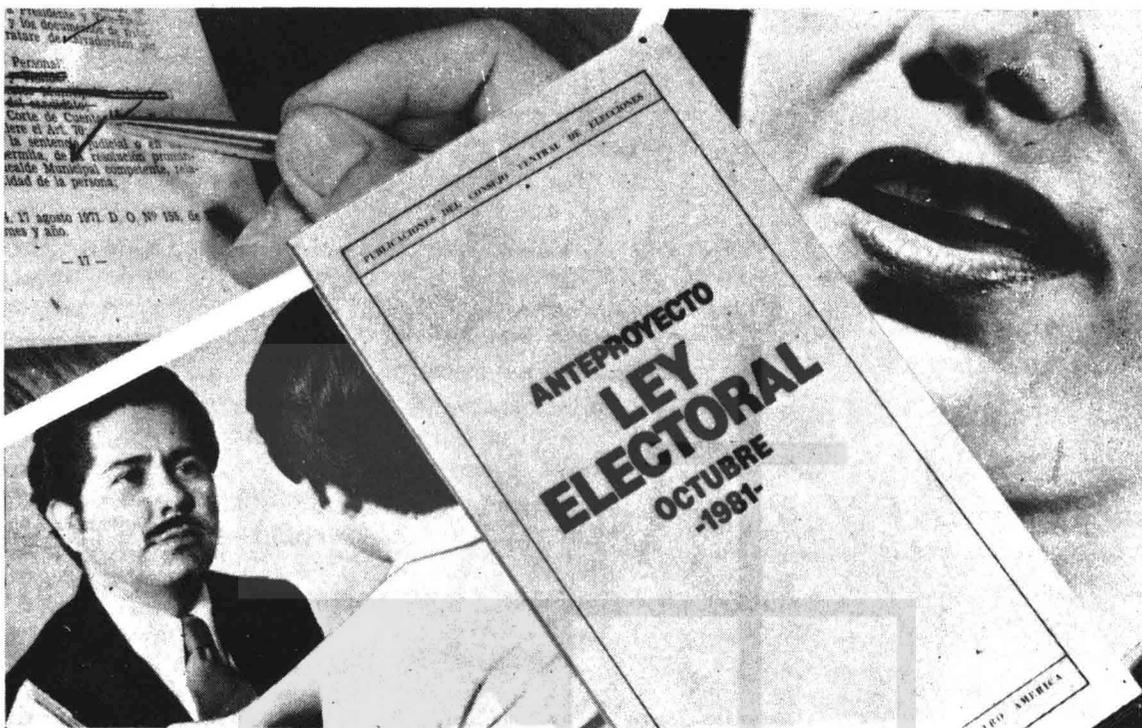
En segundo lugar, hace falta una apertura democrática. Esto es más que un simple clima de paz: se trata de condiciones en las que sea posible salir a la palestra pública sin temor a exponer las propias opiniones, sin arriesgar el empleo y aun la vida. Esto exige la inmediata derogación de una serie de decretos lesivos de los más elementales derechos humanos, como el Decreto 507. Supone también la liberación de quienes permanecen encarcelados por sus ideas políticas y el respeto e imparcialidad de los funcionarios estatales, incluidos los miembros de la Fuerza Armada, ante la expresión de la divergencia política e ideológica.



JUNTA RECEPTORA DE VOTOS

Las listas electorales son incompatibles con las listas "negras". Exige, finalmente, poner medios concretos donde la democracia pueda respirar y afirmarse: devolución inmediata de las instalaciones de la Universidad de El Salvador, apertura de los medios de comunicación masiva, levantamiento de la censura y del bloqueo a la libre entrada y circulación en el país de los políticos de oposición.

En tercer lugar, es necesario clarificar la conciencia colectiva acerca de la situación de El Salvador. La propaganda electoral no puede basarse en el ocultamiento sistemático de los problemas del país, en la difamación histriónica contra grupos y personas tomadas como "chivos expiatorios", en la mentira y el insulto contra quienes disienten. Se trata de discutir los problemas del país, y de debatirlos con honestidad. Es necesario que el pueblo sepa lo que ocurre, y se dejen de lado los "slogans" fáciles de "las campañas internacionales" o "las conspiraciones comunistas". Si se quiere que el pueblo exprese su opinión, es esencial que el pueblo sepa primero cuáles son los problemas y cuáles las verdaderas alternativas. Lo demás es añadir injuria sobre mentira; es decir, volver al pasado.



Es posible que estas condiciones suenen a utopía. Pero, nos gusten o no, representan las condiciones mínimas para que las elecciones sean democráticas y abran la puerta a la solución de los problemas que agobian a El Salvador. Habrá quien las rechace como ingenuas; habrá quien las califique de maliciosas; habrá quien, sin pensar en ello, reaccione con insultos. Todo eso equivale a cerrar el horizonte, el estrecho horizonte que hoy por hoy se nos ofrece a los salvadoreños, y seguir condenándonos a la lucha fratricida. Y esto no es una profecía y mucho menos un deseo; es simple y puro realismo.